

BREVES OBSERVACIONES

SOBRE

EL NOMBRAMIENTO DE JUECES

DE

PRIMERA INSTANCIA,

^K
Mexico
Y SOBRE LA

CONDUCTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

EN ESTE IMPORTANTE ASUNTO,

HECHAS

POR VARIOS LETRADOS DE ESTA CAPITAL

MEXICO: 1831.

**IMPRENTA DE SALVAN A CARGO DE MARIANO AREVALO, CALLE DE
CADENA NUM. 2,**

BRITISH MUSEUM

BRITISH MUSEUM



BRITISH MUSEUM

BRITISH MUSEUM

BRITISH MUSEUM

BRITISH MUSEUM

BRITISH MUSEUM

BRITISH MUSEUM

BRITISH MUSEUM

BRITISH MUSEUM

CUANDO por fortuna se está ya discutiendo en la cámara de diputados la ley tan retardada de la administración de justicia en el distrito y territorios, y cuando cabalmente se halla en la comisión el artículo respectivo al nombramiento de los jueces de primera instancia, no será de extrañar que algunos letrados usen del sagrado derecho que la naturaleza y la constitución conceden á todo mejicano para pensar y publicar sus pensamientos en punto tan importante. Al hacerlo, no se proponen promover en ningún sentido su bien individual, pues no siendo, ni queriendo ser jamás jueces de primera instancia, no tienen otro objeto en su trabajo, que el procurar el mayor acierto en la elección de los que lo sean; y el que la justicia se administre entre nosotros con la instrucción, experiencia, probidad, libertad y decoro que tanto interesa á la causa pública de la nación mejicana. Y bajo tal supuesto de imparcialidad y desinterés, deberán ser recibidas las siguientes observaciones.

El nombramiento de los jueces de primera instancia en el distrito y territorios ha sido una materia de que se han ocupado ya las cámaras de la Unión, como legislatura particular. La de senadores acordó que el nombramiento se hiciese por el gobierno, previo informe de la Corte de justicia, como tribunal supremo del distrito y territorios. La de diputados está actualmente discutiéndola; en ella hay opiniones diferentes, y estas han dado lugar á que el artículo vuelva á la comisión. Pero en ambas, el Exmo. Sr. Ministro de justicia, ha sostenido siempre con vigor y sin razón, que el nombramiento se haga por el gobierno con libertad omnímota y absoluta,

*

y sin ningún género de trabas, pues no lo sería en la realidad y en la substancia, el insignificante informe de la Corte de justicia. Y he aquí el deseo que tenemos por manifestar que el empeño de que el nombramiento del gobierno sea enteramente libre, omnímodo y absoluto, es pernicioso, arbitrario, opuesto á las bases esenciales del sistema nacional, ilegal y escandaloso en todo sentido. Para demostrar en breve estas verdades no necesitaremos de otra cosa que de acudir á los principios generales, al espíritu evidente de las leyes establecidas, al tenor de ellas mismas, y á la inteligencia comun y práctica constante de todos los gobiernos que hemos repasado y conocido, aun desde ántes que felizmente sacudiésemos el yugo del absolutismo.

Está por demas recomendar la importancia del interes público que media en el nombramiento de los jueces. Pues á este interes público se opone directamente la facultad omnímoda y absoluta del gobierno en la eleccion de los jueces; y esta es una verdad tan clara y tan notoria, que casi ni necesita de convencerse. El mejor acierto en esta materia depende esencialmente del mayor conocimiento que se tenga de las personas que puedan elegirse; de las mejores luces con que puedan calificarse la aptitud, probidad y otras cualidades de los candidatos, ya absoluta y ya comparativamente con los demas; depende tambien de la imposibilidad, ó mayor dificultad con que puedan realizarse las intrigas, las tretas, los compromisos, los resortes, los empeños y otros arbitrios de que abunda el aspirantismo; y depende igualmente de la ligacion y emulacion recíproca y muy provechosa con que es preciso se vean las autoridades que hayan de intervenir en tales elecciones.

Todas estas ventajas se logran de cierto, haciéndose el nombramiento por el gobierno con sujecion á la propuesta ó calificacion previa de otra auto-

idad facultativa; pero todas se aventuran si se le concede una libertad ilimitada, omnínoda y absoluta. El Exmo. Sr. Presidente de la República, que es el jefe supremo del distrito y territorios, no ha de ser precisamente un letrado que con sus conocimientos y su práctica esté en el caso de poder calificar con exactitud la instrucción, la carrera, conducta y mérito de los que hayan de optar las plazas de judicatura. No siéndolo, (como casi siempre sucederá), menos podrá formar un juicio comparativo entre los profesores. Tampoco es preciso que lo sea el Ministro de justicia, como no lo han sido los Sres. Llave y Herrera, que han servido estos cargos en estos últimos tiempos. De consiguiente carecerá también en este caso, del auxilio científico que pudiera prestarle su secretario del despacho.

Aun suponiendo en el gobierno la más sana intención y los más vivos deseos por el acierto, este procuraría sacarlo, ó de los informes confidenciales y privados que se le hiciesen, ó de los documentos que se le presentasen en abono de la conducta y mérito del pretendiente; pero ambos caminos, tomados por sí solos, son de suyo peligrosos y aventurados. En los informes confidenciales y secretos, obran por lo común conceptos erróneos y vulgares, y las pasiones más encontradas. La afección, el odio, el interés y parcialidad, el favor, el capricho, la rivalidad y otras cosas sabrán muy bien cubrirse y disfrazarse por los informantes, mucho más cuando el pretendiente se dé maña para dirigirlos en la empresa. Los documentos comprobantes de las pretensiones no podrán tampoco calificarse, sino por un profesor que entienda á fondo cual es el valor verdadero de todos los grados y méritos propios de la carrera. No es el volumen de los papeles que se presenten, ni el sonido material de los puestos ocupados, los que deben precisamente calificar la aptitud y circunstancias del candidato. Muchos hay que se muestran muy

ufanos exhibiendo una inmensa papelada compuesta de certificados innumerables, que se deshacen en elogios de su saber, de su probidad y otras cualidades, y que les ha prodigado el favor, la amistad, la ignorancia, la irreflexion y ligereza, ú otros antecedentes menos decorosos: y estos no pocas veces suelen ser los mas despreciables. Otros se llenan la boca relatando los cargos que han servido y las comisiones y confianzas que han desempeñado; y todo esto acaso para un inteligente no contribuye sino á confirmar mas el concepto de su torpeza, y de una conducta constantemente extraviada del camino regular.

Las autoridades ó corporaciones facultativas están muy al alcance de todos estos puntos. Ellas y solo ellas, podrán discernir lo verdadero y positivo de lo falso y abultado. „Tractent fabrilia fabri.“ Además, es mucho mas fácil sorprender, alucinar y comprometer á uno, que á muchos; es tambien mas fácil que la intriga, las relaciones y los medios diversos de que se valen los pretendientes logren su cumplido objeto en uno solo, que en muchos, porque la misma diversidad de personas intermedias, es un dique poderoso en que se estrellan los planes y tiros del aspirantismo; y la eleccion de jueces hecha de esta manera, graduada y detenida, tiene toda la presuncion á su favor, y es sin duda mejor recibida por el pueblo, especialmente en un sistema como el nuestro.

Por otra parte, los jueces de primera instancia, en el ejercicio de sus funciones son inmediatos subalternos de los tribunales superiores, á quienes las leyes por lo mismo, y no al gobierno, hacen responsables de las faltas ó excesos, en que incurren los primeros. Así lo dicta la razon, así lo exige el bien público en la administracion recta de justicia; y así lo establece con estos propios términos la ley vigente de 24 de marzo de 1813, en sus artículos 13 y

7
44 del cap. 1.º. Y ya se palpa que seria una dureza, seria inaudita monstruosidad hacer responsables en algun sentido á los tribunales superiores del manejo de los jueces sus subalternos, cuando estos fuesen elegidos sin su conocimiento y calificacion antecedente, y solo por el arbitrio absoluto y libre del gobierno.

Finalmente, es base fundamental de nuestro sistema la division de poderes y su completa independencia. Los jueces deben obrar con ella en el servicio de su cargo, y una libertad total es la que debe presidir en todas sus operaciones. Los jueces solo pueden aplicar las leyes á los casos que en particular se les presentan, y sepultar en un profundo olvido toda otra consideracion de benevolencia, de gratitud, de reconocimiento, de esperanza y de temor. En una palabra, los jueces en el ejercicio de sus funciones deben ser tales, que nada tengan que esperar, que temer, ni aun que agradecer del gobierno, el cual por varios motivos y por ocurrencias innumerables á cada paso puede aparecer interesado en muchos de los negocios judiciales.

Estos principios son los que fijaron por regla invariable en nuestro sistema la inamovilidad de los jueces, y el que estos no puedan ser removidos sino con causa justa y calificada por medio de un proceso formal, y nunca por el capricho ó arbitrio libre y absoluto del gobierno; y ellos tambien son los mismos que excluyen la omnímoda, libre y absoluta facultad para nombrarlos, porque nada es mas natural que el que las cosas guarden proporcionalmente unas mismas reglas, al hacerse y al disolverse. Y estos principios no son ahora inventados, ni ponderados por nosotros para apoyar el tema que nos hemos propuesto convencer, sino enseñados y explicados desde mucho ántes por todos los autores publicistas.

Uno dijo que: „Un pueblo, en el cual el poder

„judicial no es independiente, un pueblo en el que
 „una autoridad cualquiera puede influir sobre los ju-
 „cios, dirigir ó forzar la opinion de los jueces, em-
 „plear contra el inocente á quien quiere perder las
 „apariencias de la justicia, y ocultarse detras de las
 „leyes para herir con su espada las víctimas que
 „quiera sacrificar; un pueblo tal se halla en la situa-
 „cion mas desgraciada, y mas contraria á los prin-
 „cipios del estado social, que las hordas salvages de
 „las orillas del Ohio, ó que los beduinos del desier-
 „to.... Por lo mismo esta independencia no se pue-
 „de asegurar sino por la inamovilidad de los jueces...
 „El valor de los guerreros mas intrépidos, apenas ha
 „bastado á nuestros magistrados para pronunciar sus
 „decretos segun su conciencia. Este valor, que ha
 „hecho despreciar la muerte en una batalla, es mas
 „fácil que la profesion pública de una opinion inde-
 „pendiente en medio de las amenazas de los tiranos,
 „ó de los facciosos.... Establézcanse en hora bue-
 „na y conságrense la institucion de los jurados, la pu-
 „blicitad de las formas judiciales, y la existencia de
 „leyes severas contra los jueces prevaricadores; pero
 „ademas de estas precauciones, hágase que el poder
 „judicial esté en una perfecta independencia, y que
 „á toda autoridad se le prohiba hasta las insinua-
 „ciones contra ella, &c.”

Otro publicista de los mas moderados y juicio-
 sos de nuestros dias dijo que: „Las funciones de los
 „magistrados y jueces consisten en sentenciar con-
 „forme á las leyes los pleitos entre particulares, y la
 „importancia de ellas requiere que la autoridad judi-
 „cial esté libre de toda influencia superior: este es
 „el principio de ser los jueces inamovibles é inde-
 „pendientes en el ejercicio de su ministerio. La jus-
 „ticia es arbitraria cuando influye en ella el gobierno,
 „porque es muy posible que los jueces tengan mas fá-
 „cilmente el temor de desagradar, que el valor de re-
 „sistir á lo que injustamente se exija de ellos &c.”

El mismo autor, contrayéndose á la elección de los jueces, dijo en otro lugar: „Un buen juez es un ángel tutelar, y uno malo un azote. Por eso un gobierno que hace malas elecciones es muy culpable para con la nación, y por consiguiente, *nunca se tomarán demasiadas precauciones para evitarlas, y no se conseguirá sino estableciéndose de antemano reglas, y no escogiéndolas á la ventura....* Si el hombre en cuyas manos se pone la balanza de la justicia y la suerte de los ciudadanos, no goza *de grande consideracion y de la confianza pública,* si no le guian la instrucción y el desinterés, si no sabe, como dice Ciceron, condenar á su amigo y absolver á su enemigo, si es ignorante, corrompido, ó solamente descuidado, la venalidad y la injusticia son inevitables. „La vida, el honor y las propiedades de los ciudadanos están expuestas á la suerte, y no existe el orden social sino en el nombre.”

Sea, pues, muy enhorabuena que el nombramiento de los jueces se haga por el gobierno; pero hágase de modo que nunca queden los jueces sin la independencia y libertad que deben tener respecto del gobierno; hágase, pero de manera que no resulten prendados ó ligados á él por un motivo de reconocimiento total; hágase, pero de manera que ese reconocimiento se disminuya, distribuyéndose ó repartiéndose entre las autoridades interventoras en su elección; hágase, pero en tal forma, con tales reglas y precauciones, que nunca los jueces sean y puedan llamarse hechuras exclusivas del gobierno; hágase, pero procurándose asegurar el mejor acierto y la confianza pública en los elegidos; hágase en fin, mas estableciendo la mediación de otras autoridades facultativas, poniendo trabas y sujeciones saludables, y nunca dando al gobierno una facultad omnímoda, arbitraria y absoluta que tanto ataca y ofende la justa independencia de los poderes, base esencial de nuestro sistema.

Son tan ciertos y seguros estos principios, y tan elementales estas verdades, que desde luego fueron adoptadas y aplicadas al mismo punto del nombramiento de los jueces en las constituciones y leyes liberales que han regido entre nosotros. Así es, que la española, que hasta ahora poco nos estuvo gobernando, concedió al rey la atribucion de nombrar magistrados y jueces de todos los tribunales y juzgados; pero no libre y absolutamente, sino con sujecion precisa á la terna que el consejo de estado le propusiese. A este fin, entre otros, creó este cuerpo, el cual debia componerse de los individuos que mas se hubiesen distinguido por su ilustracion y conocimientos en los principales ramos de la administracion y gobierno del estado, y por consiguiente tambien de letrados capaces de formar por sí concepto, é instruir á los demas del mérito y circunstancias de los sujetos que aspirasen á estas plazas facultativas.

Mas las córtes españolas no contentas con ligar su monarca á la terna del consejo, intimó á este que no propusiese á ninguno en clase de magistrado ó juez, sin asegurarse ántes de la buena conducta y aptitud del que hubiese de proponer, y que esto lo hiciese pidiendo informes á las diputaciones provinciales y al tribunal supremo de justicia con respecto á los magistrados, y á las audiencias en cuanto á los jueces de primera instancia. Así está expresamente establecido en la citada ley vigente de responsabilidad de 24 de marzo de 1813, en su art. 31 cap. 1.º Y celosas todavía las mismas cortes españolas de procurar el acierto en el nombramiento de estos funcionarios, autorizaron al propio consejo de estado para que pidiese otros informes sobre las circunstancias de los sujetos á cualquiera cuerpo ó individuo, con prevencion de que ninguno pudiera escusarse de cumplirlo. Así consta del art. 10 cap. 3.º del decreto de 8 de junio de 1812, que com-

prende el reglamento del consejo de estado.

Se vé, por tanto, que las cortes españolas en su constitucion y en sus leyes ulteriores, no fueron inconsecuentes con sus principios; que adoptado el cardinal de la division de poderes y de su absoluta libertad é independendia; lo aplicaron, en cuanto fue posible en su sistema monárquico, al nombramiento de los jueces; que para lograr en él el mayor acierto; ademas de la terna referida á que sujetaron al rey, obligaron al consejo á pedir informes á los tribunales supremo y superiores de justicia, y por último; que con el propio intento excitaron al mismo consejo para que pidiese otros informes á cualesquiera corporaciones é individuos, porque nadie, sino el que quiere obrar mal, ó con arbitrariedad, podrá desdenarse de buscar cuantas luces puedan alumbrarlo.

La constitucion y leyes españolas no solo fijaron las reglas y trabas con que el rey debia nombrar en propiedad los jueces de primera instancia, sino que cuidaron igualmente de proveer de pronto remedio á la administracion de justicia en el nombramiento de los provisionales ó suplentes. Así fue; que por el art. 29 cap. 20 de la ley de 9 de octubre de 1812, se mandó que los jueces de partido fuesen substituidos en sus ausencias, enfermedades ó muerte por el primer alcalde del pueblo en que residan, con preferencia del letrado si alguno de ellos lo fuese; y que en ultramar si muriese ó se imposibilitase el juez, el gefe político superior de la provincia, á propuesta de la audiencia, nombrase un letrado, que le reemplazará dando cuenta al gobierno. De que claramente resulta, que ni el supremo de España, ni los superiores de las provincias, estaban autorizados para hacer por sí la eleccion de jueces provisionales, sino en el segundo caso á propuesta precisa de la audiencia respectiva.

Esa era la constitucion, y esas las leyes que nos regian cuando afortunadamente sacudimos el yugo

de la España. Desde entonces jamás se habían desmentido entre nosotros los principios elementales del sistema representativo liberal. Jamás se pensó dar al ejecutivo la omnimoda y absoluta facultad que hoy se pretende en el nombramiento de los jueces. Y esta es una verdad que se toca con la mano recorriendo ligeramente la serie de gobiernos que hemos tenido desde nuestra feliz independencia.

El primero lo fue el de la regencia llamada del imperio, y lejos de concedérsele la absoluta prerrogativa del nombramiento de magistrados y jueces, terminantemente se previno por la junta provisional gubernativa (que hacia entonces de poder legislativo), que todas las plazas de magistratura y de judicatura se proveyesen por la regencia, pero á propuesta en terna de la misma junta. Así consta de sus reiteradas y uniformes órdenes de 19 de octubre, 2 de noviembre del 821, y 20 de enero de 1822.

Al gobierno de la regencia sucedió el del Sr. Don Agustín Iturbide. Mucho se increpó al héroe de Iguala con la especie de que en su gobierno propendia al absolutismo; mas ninguno habrá que pueda decir que en la elección de magistrados y aun de jueces subalternos, procedió con la facultad omnimoda de que ahora se trata. Nombró los ministros del tribunal supremo de justicia á propuesta en terna del consejo de estado, compuesto de individuos propuestos por el congreso, y en cuyo consejo (así como en la junta gubernativa) habia letrados antiguos, prácticos y muy capaces de conocer y discernir el mérito de los pretendientes de su carrera.

Nombró tambien letrados que provisionalmente sirviesen de ministros en la audiencia, por tener que separarse de este tribunal los antiguos que la componian; pero este nombramiento, provisional, tampoco lo hizo por sí mismo, sino sujetándose á la propuesta en terna que pidió á la misma audiencia, segun consta del oficio dirigido á su presidente por el

Sr. Ministro de justicia de aquella época. De esta manera fueron destinados los Sres. D. José Domingo Rus, D. José Gutierrez de Rosas, D. Juan Lopez Gavilan, D. José Gonzalez Retana, Dr. D. José Vicente Sanchez, y Dr. D. Agustin Pomposo Fernandez de San Salvador; y para fiscales, los Sres. D. Francisco Molinos del Campo, y D. Agustin Torres y Guzman, quedando el Sr. D. Francisco Miñaga, propuesto en segundo lugar, por el Sr. Molinos que renunció. El soberano Congreso no reprochó este nombramiento de suplentes, y ántes bien señaló sueldo á los nombrados aun mucho despues de la separacion del gobierno del Sr. Iturbide, como aparece de su órden de 19 de julio de 1823.

Nombró en fin el mismo Sr. Iturbide, en el tiempo de su gobierno, para juez de letras propietario, por la vacante del Sr. D. Tomas Salgado, al Sr. D. Francisco Ruano; mas tampoco lo hizo por sí y ante sí, sino precisamente á propuesta en terna del consejo de estado, y con previo informe de la audiencia. Estos fueron hechos públicos y notorios; todos los vimos, y nadie habrá que se atreva á desmentirlos.

Al gobierno del Sr. Iturbide sucedió el del supremo poder ejecutivo. Recordamos que en este tiempo no hubo nombramiento alguno de juez de primera instancia; pero sí sabemos con toda certeza, que ese gobierno dictó una resolucion comunicada á la audiencia en los términos siguientes:—Exmo. Sr. —El supremo poder ejecutivo ha declarado, que el nombramiento de relatores y demas subalternos de ese tribunal, aun en clase de interinos, es atribucion propia del Supremo Gobierno, y que debe hacerse á propuesta de esa audiencia. Lo que participo á V. E. para su noticia y demas efectos consiguientes. Dios &c. México diciembre 2 de 1823.—*Llave*.—Exma. Audiencia de esta capital.

El supremo poder ejecutivo acabó por haberse adoptado y planteado el gobierno representativo po-

pular federal. Nuestra constitucion fijó el sistema que debia regir la nacion. Cimentada sobre las bases elementales de la division de los tres poderes y su libertad é independencia recíproca, fue tambien consecuente á estos principios en sus disposiciones ulteriores. Dejó la eleccion del Presidente y Vice presidente de la República y de los ministros de la Corte suprema de justicia á las legislaturas de los Estados, combinando de este modo y en lo posible la popularidad con el mejor acierto de la eleccion; y en defecto de mayoría de votos, autorizó para hacerla al Congreso general. Pasando despues á la de los jueces de circuito y de distrito, y promotores fiscales de los primeros, la consignó al supremo poder ejecutivo de la República; pero no simple y sencillamente, sino con sujecion precisa á la propuesta en terna que le hiciese la suprema Corte de justicia. Y de esta manera combinó tambien el principio de que el nombramiento de estos jueces emanase en su último grado de la suprema autoridad ejecutora, con el otro de su independencia y libertad, con el de evitar absolutismo y arbitrariedad en estas elecciones, y con el de procurar su mayor acierto, dando para todo esto una intervencion ó cooperacion eficaz é indispensable á la suprema autoridad facultativa.

Nuestra constitucion dividió tambien los Estados, que debian componer la federacion, sancionó ademas su soberanía, independencia y libertad en todo lo relativo á su gobierno y régimen interior, pero dándoles juntamente ciertas bases ó reglas elementales sobre que debiesen establecerlo. Una de ellas, y ciertamente la primordial, fue la division é independencia de los tres poderes; y partiendo de este principio, comenzaron á plantear sus tribunales y juzgados, dictando reglas oportunas para el nombramiento de sus jueces. Todos, ó casi todos, los Estados fueron consecuentes en este punto con aquel princi-

pió, porque no dejaron la eleccion de jueces, ni aun la de los de primera instancia, al absoluto y libre arbitrio de su gobierno, como desde luego se nota en sus constituciones y leyes respectivas.

En el Estado de Méjico se dió al gobernador por la ley orgánica de 9 de agosto de 1824, la atribucion expresa de nombrar los magistrados de la audiencia y demas plazas de judicatura; pero no haciéndolo libremente, sino *de acuerdo con el consejo* nombrado por el congreso; y en estos mismos términos está concedida esta facultad en su constitucion. Lo que hay de particular es, que habiéndose suscitado duda sobre el modo de ejercerla, se expidió el decreto de 16 de febrero de 1825, en que se resolvió que el consejo está facultado para excluir á las personas nombradas por el gobernador, y que en el caso de esta exclusion el mismo gobernador hiciese nuevo nombramiento sujeto siempre á lo prevenido en el artículo anterior. Se ve, pues, que en el Estado de Méjico no tiene el gobierno facultad omnínoda para el nombramiento de los jueces, sino ántes bien sometida y subordinada á la aprobacion ó exclusion del consejo.

En el Estado de Querétaro el gobernador nombra los jueces de letras; pero á propuesta en terna de la junta consultiva, como por punto general debe hacerlo en la eleccion de todos los funcionarios y empleados de dicho estado.

En el de Guanajuato se despachan las causas civiles y criminales por los alcaldes electos popularmente; al efecto tienen sus asesores, que sirven de fiscales de hacienda pública, y son nombrados por el gobierno á propuesta en terna del tribunal supremo de justicia.

En los de Michoacan, Occidente, Tabasco y Tamaulipas, los jueces de primera instancia ó los asesores de los alcaldes son nombrados por el gobierno á propuesta en terna del consejo. En el de Yuca-

tan la propuesta la hace el Senado. En los de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo Leon, San Luis, Zacatecas, Puebla y Veracruz, se administra justicia en primera instancia conforme á las leyes establecidas, ó que en adelante se estableciesen. Y estando vigente la de arreglo de tribunales, es claro que su nombramiento no es atribucion libre y absoluta del gobierno. Y en los Estados de las Chiapas y Oajaca se observa tambien lo que en Guanajuato, y es, que los jueces ó asesores de primera instancia, son nombrados por el ejecutivo á propuesta en terna de los tribunales de justicia. De todo resulta, que casi en ninguno de nuestros Estados tiene su gobierno la facultad arbitraria de nombrar á los jueces sin ligacion á un cuerpo consultivo ó á una autoridad facultativa.

Hasta aqui hemos recorrido todos nuestros gobiernos desde que con la constitucion española pusimos el pie por la vez primera en un sistema liberal. Mas si nos remontámos á los tiempos oscuros del servilismo, tambien encontraremos que aun entónces los Monarcas españoles nunca obraban en este punto con una arbitrariedad total y escandalosa. Tenian dos cámaras, de las cuales la una se contraia á proponer en terna los individuos que contemplaban mas aptos para obtener los empleos de judicatura en Indias, y la otra para los de Castilla. Raras veces los conferian sin que precediese su propuesta, y cuando lo hacian, al punto se marcaba á los agraciados como hechuras no de la justicia y de un mérito positivo y calificado, sino de la proteccion, del favor y de las intrigas de la corte. Entónces lo hacian, porque podian hacerlo, porque no los ligaban leyes algunas, y porque no tenian otra constitucion que la muy compendiosa de los déspotas. *Sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas.*

... Pero en los gobiernos libres, en esos gobiernos en que se hace alarde de la franqueza y bien obrar,

en que tanto se decanta el beneficio público y la general confianza de los súbditos, y en que los buenos gobernantes anhelan porque para todo se les den reglas fijas que obedecer y á que sujetarse, en estos gobiernos, decimos, es un escándalo y una desvergüenza que se pretendan facultades ilimitadas, quitándose las trabas y requisitos saludables que alejan la arbitrariedad, aseguran el acierto y sostienen el decoro y fuerza moral de los mismos gobiernos.

Desgraciadamente el Ministro de justicia tiene hoy esta pretension. El actual Sr. Ministro se ha presentado en la cámara de diputados con el empeño de que el gobierno por sí y ante sí nombre los jueces del distrito y territorios, sin la obligacion de conformarse á ninguna propuesta ni calificacion antecedente ó posterior. Con este preciso fin ya combate el proyecto de la intervencion del colegio de abogados, que con el celo mas recomendable propuso uno de los sres. diputados; ya quiere suponer que con el simple informe de la Corte de Justicia está allanado todo; y ya refuta con vigor la aprobacion del Senado que las comisiones propusieron, estimando los mas que el nombramiento absoluto y libre del gobierno, no presta todas las garantías que se han menester para lograr el acierto y la general confianza de los pueblos.

Nosotros nos abstenemos de emitir nuestro juicio acerca del proyecto de la aprobacion del Senado, porque ya vemos que no admitido por la Cámara el artículo que la comprendia, volvió el asunto á las comisiones. Mas no podemos menos que decir, que la previa audiencia del colegio de abogados seria muy oportuna cuando no fuese por una propuesta formal y rigurosa; á lo menos por vía de informe de un cuerpo perito, que sobre esta circunstancia reúne la de ser tan interesado en la administracion recta de justicia. Ni obsta en manera alguna el que, como opuso el Sr. Ministro, el colegio de abogados no tenga investidura ó autoridad pública, porque es

ta no se necesita para el solo efecto de ministrar luces y dirigir la opinion. Las leyes españolas ya hemos visto que previnieron al consejo que tomase informes de cualquiera corporacion ó individuo particular. Y ¿tendremos nosotros ménos delicadeza ó ménos celo que el que en caso idéntico manifestaron los legisladores españoles?

El Sr. Ministro aseguró en la discusion, que el gobierno estaba anuente en que á la eleccion de los jueces precediese el informe de la Corte Suprema de justicia; pero es preciso conocer que tal informe seria ridículo y ocioso, si con él no habia de ligarse en manera alguna al gobierno para el nombramiento; que seria tambien insignificante, si solo contuviese un abono general, mas ó menos circunstanciado, del mérito de los candidatos; y que si comprendia un vejámen exacto y detenido de su aptitud y conducta, ya considerados absolutamente ó ya comparados entre sí, esta seria una obra difícilísima de suyo, complicada y odiosísima, y daria lugar á celos y rivalidades, y á resentimientos y quejas muy trascendentales a la armonía y buen orden de los profesores, sin provecho alguno de su parte ni del servicio público á que fuera dirigida.

Y si los deseos y conceptos del Sr. Ministro en la materia se han hecho en esta ocasion tan reparables, mucho mas lo habrá debido ser la conducta que ha guardado en los casos prácticos que se le han ofrecido. No quisiéramos ciertamente tocar un punto que ni de muy léjos pudiese ofender su pundonor y delicadeza; pero es indispensable, una vez que en beneficio público nos hemos encargado de presentar los males padecidos para precaver que se repitan, haciendo estas respetuosas advertencias á la autoridad única que radicalmente debe prevenirlos.

El gobierno próximo anterior nombró de juez de letras interino de este distrito al Lic. D. Manuel Zozaya, haciéndolo sin propuesta en terna de la Suprema Corte, y lo que es mas, sin siquiera pedirle

un informe que medio cubriese la arbitrariedad de esta eleccion. Nuestro gobierno actual incurrió en el mismo defecto, nombrando por sí y ante sí de juez de letras interino al Lic. D. Domingo Saviñon, sin solicitar siquiera que el Supremo Tribunal le dijese si ese jóven letrado estaba ya en disposicion de desempeñar el importante y delicado cargo de la judicatura. Lo cierto es que ambas elecciones se hicieron en todo de una propia manera; que si la Corte Suprema hubiera querido sostener entónces sus atribuciones, habria evitado sin duda alguna el desagrado general con que fueron recibidos los dos jueces, y se cometió en nuestra concepto, una positiva infraccion de las leyes que nos rigen, la cual con dificultad podrá disculpar el Sr. Ministro de justicia. Vamos á demostrarlo con un silogismo muy sencillo.

La Suprema Corte de justicia ejerce por ahora en el distrito y territorios de la federacion las atribuciones que por la ley de 9 de octubre de 812 correspondian á las *audiencias de Ultramar*, que se componian de tres salas, en cuanto no se oponga á la constitucion y leyes de la Union. Esta es la letra misma del art. 1.º de la ley de 23 de mayo de 1826.

Es asi que á todas las *audiencias de Ultramar* correspondia hacer propuestas en terna de los jueces de letras provisionales ó suplentes al gobierno de las provincias respectivas. Es tambien, como se ha visto, prevencion expresa del citado art. 29 cap. 2.º de la ley de 9 de octubre de 812.

Luego á la Corte Suprema de justicia correspondia proponer en terna para las judicaturas provisionales del distrito. Luego se cometió una infraccion de ley, cuando sin esa previa esencialísima circunstancia se hicieron ambos nombramientos.

Quisiéramos oir la salida que el Sr. Ministro da á este silogismo, cuyas premisas son dos leyes terminantes, y la consecuencia no adolece de ningun vicio.

Se dice que la propuesta en terna de los jueces

interinos debía entenderse con el gobierno superior de los gefes políticos de las provincias en el sistema monárquico español, mas no con el supremo de la Nacion Mejicana despues de su independendia y sistema federal, nosotros le replicarémós lo primero, que el Exmo, Sr. Vicepresidente de la República al nombrar estos jueces no procede como tal, sino puramente como gefe supremo del distrito y territorios, á la manera misma que las Cámaras de la Union no ejercen como tales sus funciones legislativas, sino como legislatura particular de ellos, y á la manera igualmente que la Corte Suprema hace de Tribunal de justicia en el propio distrito y territorios. Lo segundo que la citada ley de 23 de mayo de 1826, tuvo bien presente nuestra independendia, tuvo bien presente el sistema federal, y que á virtud de él el Presidente de la República era el gefe supremo de este distrito y territorios: y con todo se ve que quiso sujetarlo á la propuesta en terna de su Tribunal de justicia en la provision de jueces suplentes de primera instancia, una vez que dió á este todas las atribuciones de las *audiencias de Ultramar*, entre las cuales era una la propuesta en terna de dichos jueces provisionales. Y lo tercero, que aun permitiendo sin conceder que el Presidente de la Federacion tuviese esta suprema investidura al hacer estos nombramientos peculiares del distrito; era consecuente y muy debido que en ellos se arreglase tambien á las leyes generales de la federacion, segun las cuales la eleccion de jueces y aun de sus suplentes debe hacerse á propuesta en terna del Tribunal Supremo de la nacion.

La razon se está cayendo de su peso, porque obrar con la alta prerrogativa de Presidente de la Federacion y no sujetarse á las leyes generales de la misma Federacion, es una inconsecuencia monstruosísima; y atenerse á unas leyes para un negocio y prescindir de ellas en lo demas del propio negocio, es ciertamente hacer burla de todas.

No hay una sola que autorice al Presidente de la República para nombrar por sí y ante sí los jueces de primera instancia en el distrito y territorios, ni en clase de propietarios, ni en la de provisionales ó suplentes. Si la hubiere la ignoramos; y esperamos que se nos muestre.

La de 15 de abril de 1826 dispuso que, *entre tanto se da la ley que arregle la administracion de justicia en el distrito y territorios, continúen bajo la inspeccion del gobierno general* funcionando en toda la extension del distrito federal los jueces de letras, pagándose por la *tesorería general* como igualmente los *demás subalternos.* Y si por esta ley los jueces del distrito federal eran pagados por la *tesorería general* de la federacion y quedaron sujetos á la inspeccion del *gobierno general*, era una consecuencia forzosa é indisputable, que este mismo *gobierno general* ejerciese esa *inspeccion* bajo las leyes *generales* de la *Federacion.* Es casi que por estas *leyes generales* el Presidente no puede nombrar los jueces de la *Federacion*, ni propietarios ni suplentes, sino á propuesta en terna del Tribunal Supremo y *general* de la propia, segun los artículos 2 y 25 de la *ley general* de 20 de mayo de 1826. Luego esta debió observarse en todo lo relativo y concerniente á la *inspeccion* del distrito federal.

Después de la citada ley de 15 de abril de 1826 se dió la de 23 de mayo del mismo año. Esta ley ya se contrajo á la administracion interior del distrito y territorios por ella se mandó guardar la de 9 de octubre de 1812, en toda cuanto fuese propio de las audiencias de Ultramar: y en art. 29 cap. 2 fue concebido en estos precisos términos. Los jueces de partido serán substituidos en sus ausencias, enfermedades ó muerte por el primer alcalde del pueblo en que residan; y si alguno de los alcaldes fuese letrado, será preferido.—En Ultramar si muriese ó se inutilitase el juez, el jefe político supe-

„rior de la provincia) á propuesta de la audiencia,
„nombrará interinamente un letrado que le reemplaza-
„ce y dará cuenta al gobierno.”

Esta es la letra del artículo; y según ella podemos preguntar al Sr. Ministro: ¿á cual de sus partes quiso sujetarse? Si á la primera, no debió nombrar por sí y ante sí juez de letras provisional, como por esta ley no podían hacerlo los monarcas españoles; ni en los juzgados de Madrid que tenían tan á su vista: sino sólo disponer que el alcalde primero, y con preferencia el que fuere letrado, supliese las funciones de juez de primera instancia. Si á la segunda, tampoco debió nombrarlo, como lo hizo, sino á propuesta en terna de la Suprema Corte. Y si á ninguna de sus partes: he aquí visto que se faltó á la repetida ley de mayo de 1826, dictada precisamente para la administración de justicia en el distrito y territorios.

Esa ley de arreglo de tribunales, está y ha estado vigente en ellos, y ha debido también estarlo en el artículo de que se trata, porque tampoco en él es opuesta á la constitucion y leyes de la Union, sino antes bien muy conforme á su espíritu y tenor. Por la constitucion, el jefe supremo de la Federacion mejicana, está sujeto á la propuesta en terna de la Corte Suprema de justicia para el nombramiento de los jueces de circuito y de distrito, y sus promotores. Por las leyes de la Union está sujeto á la misma propuesta, aun respecto del nombramiento de *suplentes* de los juzgados de distrito. Por las mismas leyes de la Union está inhibido del de todos los *subalternos* de la Corte Suprema de justicia, y cometido este al mismo Supremo Tribunal. También por ellas propias está inhibido del nombramiento de los agentes fiscales, y concedido este á la Suprema Corte á propuesta en terna de su fiscal. En una palabra, la constitucion y las leyes de la Union, en todas sus partes y bajo todos sus aspectos, están arrojando la mas constante y decidida oposicion al pernicioso ab-

solitismo del poder ejecutivo en la eleccion de los funcionarios del judicial, ¿Cuál, pues, sería la ley, cuyo tenor ó espíritu asegurase al gobierno en el nombramiento de tales jueces interinos? Esperamos la respuesta: mas entretanto debemos insistir en que hubo de todas una infraccion hasta hoy inexcusable.

El gobierno actual acaba de nombrar de promotor fiscal interino del juzgado de hacienda y de distrito al Lic. D. F. Alcántara, con el sueldo de un mil y quinientos pesos. Este letrado no es cesante ni pensionista, como lo era el Lic. D. José Mariano Reyes Venavides, su antecesor en este cargo. Sin embargo, se le nombró para él, dejándose sin ocupacion efectiva á otros letrados mucho mas antiguos que Alcántara, que perciben pensiones considerables del gobierno general, y están expeditos para el trabajo. Ignoramos si hay ley posterior que autorice la creacion de esta plaza. Pero sabemos, que el crear empleos públicos de la Federacion y señalar sus dotaciones, es facultad *exclusiva* del Congreso general. Sabemos tambien, que ni la constitucion ni la ley de 20 de mayo de 1825, dieron á los juzgados de distrito el promotor fiscal que pusieron en los tribunales de circuito. Y sabemos igualmente, que la Tesorería general ha resistido en estos dias pagar el sueldo señalado á este nuevo funcionario. Mas haya lo que hubiere en esta materia, lo cierto es, que debiendo nombrarse los promotores fiscales de circuito á propuesta en terna de la Corte de justicia, parece que otro tanto debiera hacerse en el de distrito, cuando aun sus *suplentes* son elegidos de este modo. No fue así, segun estamos informados, sin que podamos alcanzar la razon de diferencia. Y si la Corte suprema hubiera hecho la propuesta, las leyes que tratan sobre ocupacion y preferencia de pensionistas y cesantes habrian interpeládola para procurar el beneficio del erario nacional, ó fijado su responsabilidad en caso contrario.

Demostrado ya que el empeño que se tiene por

el Ministerio de justicia de que el nombramiento de jueces de primera instancia se haga por el gobierno con facultades omnímodas y absolutas, sin trabas ni sujeción alguna, es pernicioso, arbitrario, opuesto á las bases esenciales de nuestro sistema, y al espíritu y tenor de todas las leyes, y escandaloso en todo sentido; examinémosle ligeramente los motivos que se presentan para la novedad que se pretende. Esos motivos son los que pondera y recopila el artículo inserto en el Registro oficial del día 15 de julio de este año. Y á la verdad, cuando á primera vista nos impusimos de sus razones, por lo pronto nos ocurrió la idea de que el autor del dicho artículo se había propuesto, mas bien ridiculizar desde entonces la pretensión actual del ministerio, que fundarla, para que pudiese ser adaptada por el cuerpo legislativo; mas reflexionado despues que el periódico que lo comprende es ministerial, y que por lo mismo no pudiera abrigar tales intenciones, aplicamos á este caso el axioma corriente de que una mala causa solo puede defenderse con especies falsas, contradictorias, impertinentes, y que con mucha facilidad pueden retorcerse contra el fin del que las vierte. Todas las razones que contiene el citado artículo del Registro, están substancialmente preocupadas y desvanecidas en este papel; sin embargo, nos tomaremos el trabajo de darles ahora una ligera y mas contraria contestación.

Que el nombramiento de los jueces no sea materia que exija grandes precauciones, lo dice el artículo; mas solo su autor será el primero que lo diga, pues todos saben que la vida, el honor y las propiedades de los ciudadanos, están sujetas á la deliberación de los jueces, que en los de primera instancia tienen una intervención muy activa y poderosa en objetos tan importantes, que estos en ningun sentido, ni en grado alguno del orden de los juicios, pueden ser despreciables; y que la vindicta pública, interesada en el pronto y justo castigo de los deli-

tos, casi toda depende del empeño, exactitud y acierto de los jueces inferiores, porque errando estos las primeras diligencias, los delitos quedan impunes sin ser ya tiempo de que los superiores puedan remediarlo. Una experiencia dolorosa acredita constantemente esta verdad. Es, por tanto, un desatino, que el nombramiento de jueces de primera instancia no sea *materia que demande grandes precauciones*.

2.º Que „no es justo despojar al gobierno de la *suprema inspeccion que le ha concedido la Carta federal*.” Nosotros contestamos, que haciendo el gobierno la eleccion, á propuesta de la autoridad judicial y con calificacion antecedente de los cuerpos facultativos, no se le quita esa inspeccion, como no se la quita la misma Carta con sujetarlo á dicha propuesta en la eleccion de jueces de distrito y de circuito, y como tampoco se las quitan, las constituciones de todos los estados á sus gobiernos respectivos. Mas ¿qué impudencia hacer valer para un solo punto la Carta federal, y desentenderse de ella para los demas!

3.º Que *las leyes hacen responsable al gobierno de la recta y pronta administracion de la justicia*. Tambien esas mismas leyes hacen responsables, y mas inmediata y directamente, á los tribunales superiores de la conducta de los jueces subalternos. Luego es justo que ámbas autoridades concurren en su nombramiento, y que concurren de tal manera, que recíproca y eficazmente se ligen para el acierto, y para precaver su responsabilidad proporcionalmente mancomunada.

4.º Que si el gobierno puede errar en tales elecciones, protegiendo á alguno que sea menos digno y postergando al que lo sea mas, tambien sucederá lo mismo en la Corte suprema, en el ayuntamiento, en el colegio de abogados, y en cualquiera corporacion, porque todos son hombres sujetos á pasiones, relacionados y muy capaces de errar. Es verdad; pero ya está dicho, que esos errores, esas relaciones y esos antecedentes de predileccion, son mas justos de temerse en uno solo, que en muchos; y que lograrán su cumplido efecto, cuan-

do el deseo de realizarlos se dirige á conquistar á un individuo, y no á muchos reunidos; porque su misma reunion ofrece por una parte un obstáculo gravísimo que enervará la fuerza de los empeños, y por otra asegura el acierto en las elecciones, y la confianza pública de los elegidos. Cabálmente en estas consideraciones están cimentadas las ventajas de los gobiernos representativos sobre los absolutos; y si ellas fuesen despreciadas, á Dios gobierno Republicano, á Dios tribunales colegiados, á Dios cuerpos facultativos. Todas estas instituciones en un momento vendrían á tierra, si se admitiesen las máximas irregulares del articulista. Parece que en esto no habla un buen republicano (como lo será sin duda el autor del artículo), sino un rancio absolutista.

La Corte suprema de justicia y el colegio de abogados podrán tambien errar; pero mas raras veces; y no puede exigirse que las leyes precavan todos los males, y corten de raiz todos los abusos; basta solo que eviten los mas fáciles y corrientes.

5.ª *Que se trata de un gobierno nacional, que debe inspirar confianza, y ha de temer la censura de la imprenta.* Tambien deberán temerla la Corte de justicia, y el colegio de abogados; y será mayor la confianza que el gobierno inspire, cuando se reúne para tales elecciones con las autoridades y cuerpos facultativos, quienes tampoco son extranjeros sino igualmente nacionales.

6.ª *Que el gobierno podrá desear justamente premiar á algun ciudadano sus importantes servicios, y que sin embargo de tener los requisitos de la ley, sufra ser excluido de la terna á esfuerzos de los otros pretendientes.* Esta especiota exige alguna mas detenida contestacion.

Si el gobierno en alguna vez tuviere justos deseos de premiar algun letrado con una judicatura por sus servicios importantes, el mismo gobierno oportunamente podrá indicar la justicia de sus deseos; y el mismo interesado podrá tambien acreditar la verdad é importancia de esos servicios, como uno y otro

lo han sabido hacer en casos semejantes. Haciéndolo la Corte suprema, el colegio de abogados, y toda otra corporacion mejicana, no podrán desentenderse del mérito de un pretendiente tan recomendado. ¿Acaso alguna de estas corporaciones es española ó extranjera, para que pueda ver con zaña y con odio, ó con indiferencia y apatía los verdaderos servicios prestados á la Nacion. Mejicana? ¿Acaso ellos tienen diversa patria que el gobierno? El autor del artículo les hace un agravio enorme con tales alegatos.

Por otra parte, en esto de *méritos y servicios* puede haber graves equivocaciones. Habrá algunos que sean efectivamente prestados á la nacion, y habrá otros puramente dirigidos á las personas y miras particulares de los gobernantes; y nada es mas fácil que confundir los unos con los otros. En la eleccion del Lic. Alcántara para promotor interino del juzgado de distrito, tenemos un ejemplar muy acomodado. Nada ocurre que decir contra la conducta y mérito que tenga el Lic. Alcántara; pero es un discípulo del actual Sr. Ministro de justicia, inerece su favor, y logra tanto su confianza que se apersona por S. E. en los negocios propios de su profesion: y no será extraño que para la preferencia de su nombramiento hayan influido mucho esas privadas consideraciones en el ánimo recto del mismo Sr. Ministro, y acaso sin advertirlo. Las públicas que exigen los verdaderos servicios hechos á la pátria, y el mérito positivo contraído en la carrera, nada tienen que temer de la calificacion de los tribunales y cuerpos facultativos, cuando las otras huyen y deben recelar mucho de su censura.

7.º Concluye el artículo diciendo, que *si la experiencia mostrare en lo de adelante que hay algunos abusos en las facultades absolutas del gobierno, estas pudieran reformarse*. Contestamos, recordando solo aquellos principios sabidísimos que dicen: „Mejor es precaveer que curar.” „Mas seguro es evitar el daño, que trá-

tar de remediarlo despues de padecido." Si hubiera abusos en ese género de facultades, aunque despues se quitaran ó moderaran al gobierno, los males pasados sufridos se quedaban, y solo los futuros pudieran evitarse.

Nosotros tambien concluimos ya estas observaciones, sometiéndolas gustosos al juicio respetable de las Cámaras. Estas se componen de hombres ilustrados, de patriotas recomendables, de letrados expertísimos. Las Cámaras de la Union forman la legislatura particular del distrito y territorios. Sus individuos son los electos por todos los Estados de la Federacion; y no es de esperar que *El gobierno del distrito federal concedan el absolutismo que negaron á sus gobiernos las constituciones y leyes peculiares de sus Estados respectivos.*

Ni remotamente hemos intentado ofender al actual Sr. Ministro de justicia. Respetamos en su persona la alta confianza que lo distingue en la nacion; y como compañero en la carrera lo estimamos sinceramente por sus prendas apreciables. Estamos tambien muy lejos de denunciar su responsabilidad por sus hechos pasados; ellos acaso no serán ilegales, como los hemos presentado; y cuando lo sean, nunca serán criminales, sino efectos sin duda de la inadvertencia ó irreflexion, de que nadie puede libertarse.

Muchísimo ménos queremos ofender á un gobierno por quien siempre han estado nuestros votos. Solo pretendemos que, pronunciado felizmente contra la arbitrariedad y desprecio de las leyes, cumpla en todo con ellas, y con el voto general de la nacion al legitimarlo. Deseamos, en fin, que confunda á sus enemigos, que son los del órden público, protestando á todos los mejicanos con verdad y con firmeza *«No hay ley que dejara de cumplir, ni medida que reusara, sujetando ~~ni~~ autoridad á la mayor confianza de los pueblos.»*

Méjico 25 de diciembre de 1831.—*Varios letrados que no son, ni quieren ser jueces de primera instancia.*